Carlos BARRERA

Poder político, empresa periodística y profesionales de los medios en la transición española

1. *Introducción*

La historiografía de los últimos años acerca de la transición política operada en España entre 1975 y 1982 ha abundado en la descripción y el análisis de los cambios y de las mutaciones de carácter político e ideológico habidos en la clase política, en las instituciones y en la vida del país. Resulta conocido que el grueso de la reforma política, entendida ésta en su sentido más estricto y jurídico-constitucional, fue llevada a cabo fundamentalmente por los sectores reformistas procedentes de la clase política del franquismo. Y a pesar de que siguió existiendo, durante aquellos años, un núcleo duro de resistencia formado por hombres falangistas o simplemente franquistas, es cierto también que se produjo una adaptación de gran parte del personal político a las nuevas condiciones democráticas que se fueron instaurando en el país.

Se produjo, pues, una conversión democrática de la mayoría de la clase política que, independientemente del juicio moral que pueda suponer, coadyuvó a que el proceso de cambio se efectuara de un modo básicamente pacífico y no traumático. Lo cual no quita que, en su transcurso, se sucediera más de un episodio difícil que pudo haber truncado el éxito final de dicho proceso.

Una dinámica similar, pero menos estudiada en su globalidad, tuvo lugar en el ámbito de los medios de comunicación, y mucho más específicamente en la prensa escrita, que venía gozando de un papel privilegiado desde la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Al igual que en otro tipo de poderes como el político o el económico, también en el poder informativo se registró una conversión democrática en una parte importante de sus protagonistas: tanto en las empresas periodísticas, o lo que es lo mismo, los editores de prensa, como en los profesionales de la información que formaban las redacciones de los periódicos.

Durante los años que van desde 1975 a 1984 el panorama periodístico sufrió notables variaciones, lógicas si se tienen en cuenta los cambios políticos experimentados. Un total de sesenta diarios dejaron de publicarse a lo largo de ese período: veinticinco de ellos pertenecían a la antigua cadena de Prensa del Movimiento, luego Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), y otro buen número eran periódicos que habían aparecido ya tras la muerte de Franco en 1975. Y cerca de la mitad de los diarios que se editaban en 1984 no existían en 1975 [\[1\]](#). Todo esto nos da una idea de que, en efecto, se experimentó una transición en el mundo de la prensa, que afectó evidentemente a sus dos principales pilares: empresa y periodistas.

Algo diferentes resultan los casos de la radio y de la televisión, en los que el punto de partida, en lo que a libertad de expresión se refiere, era menor y la iniciativa privada se encontraba mucho más restringida. Sin embargo, la democratización de la vida política y de sus instituciones impulsó la progresiva aunque diferente apertura informativa de ambos medios. Pronto, además, los propios editores de prensa se interesarían por ellos como salida natural de sus expectativas de negocio y de influencia. La creciente desregulación y el desmantelamiento de la tutela informativa ejercida por el Estado, si bien éste mantuvo aún notables límites, permitieron una mayor libertad para las empresas informativas que en los últimos tiempos del tardofranquismo. Esto se dejó notar en el mayor dinamismo que mostraron: el mismo que propiciaría más tarde, junto a otros factores, la formación de grandes grupos de comunicación, casi inexistentes hasta mediados de los años ochenta.

Empresa informativa, profesionales de los medios y poder político conformaron así los tres vértices de un triángulo cuyas relaciones mutuas, en uno u otro sentido, se hace necesario desentrañar para comprender correctamente la evolución tanto de cada uno de los elementos en particular como de su conjunto. Y una realidad que no puede olvidarse ni dejar de tenerse en cuenta es la doble naturaleza material y espiritual, comercial e ideológica de las empresas de comunicación [2]. Buscan al mismo tiempo *profits and prestige*, esto es, beneficios necesarios para la continuidad de la empresa, junto con prestigio y credibilidad para influir con su mercancía en el hombre y en la sociedad. Perder de vista estos componentes y su interactividad significaría la incapacidad para comprender la dinámica de sus relaciones para con los poderes políticos y económicos y para con los hacedores de los mensajes informativos, esto es, los periodistas [3].

2. La pretransición de la prensa en el tardofranquismo

Desde el punto de vista de la prensa, la transición hacia un régimen de mayores libertades dio comienzo con la Ley de Prensa e Imprenta, habitualmente conocida como ley Fraga, por ser el entonces ministro gallego su principal impulsor. En el contexto político de la dictadura franquista constituyó una importante avanzadilla en el proceso de apertura o reforma del régimen que algunos sectores franquistas, procedentes de distintas familias políticas, venían propugnando. Es más, puede afirmarse que esta de la libertad de expresión fue la única reforma aperturista seria obrada en el ámbito político, por cuanto las otras libertades públicas clásicas como las de reunión y de asociación quedaron prácticamente sin desarrollar o experimentaron sólo tímidas y nunca decisivas reformas.

De este modo, y merced en primer lugar a las nuevas posibilidades que abría la ley y luego a la audacia de una serie de periódicos y periodistas que forzaron los límites imprecisos que dicha ley otorgaba o concedía a la libertad de información, se consiguieron crear los primeros debates de opinión pública en el franquismo, hasta entonces impensables por imposibles. Ciertamente no fue posible una pluralidad total sino limitada, pues España seguía siendo una dictadura y el propio texto de la ley Fraga estaba lleno de controles y cautelas administrativas amenazadoras, pero en términos globales significó la apertura de un cauce de discusión pública mucho más abierta y avanzada que la que se daba en otros foros oficiales como las Cortes, el Consejo Nacional del Movimiento y otras estructuras e instituciones del régimen.

Esta apertura provocada por la nueva ley de prensa, junto con la liberalización y el desarrollo económicos y la influencia del Concilio Vaticano II en una nación confesionalmente católica como España, fueron los tres factores clave de la apertura o pretransición, del cambio en las mentalidades y en las costumbres de los españoles, que facilitarían una transición no excesivamente convulsa ni traumática. Y de esos tres elementos, insistimos, el único de carácter estrictamente político fue el nuevo juego de relaciones instaurado entre el poder y la prensa desde 1966. En palabras de Juan Luis Cebrián, entonces jovencísimo periodista, la entrada en vigor de esa ley supuso "un paso sin retorno" [4], un punto de inflexión no sólo para la prensa sino para el sistema. O en otras palabras expresivas de un general franquista, fue "un boquete en la línea de flotación del sistema" [5].

Algunas determinadas políticas de información llevadas a cabo desde el Gobierno influyeron notablemente en que la apertura informativa se fuera abriendo paso. Fraga, como acertadamente escribió Antonio Alférez, "entrebrió la puerta" [6] ya cuando desde 1962 tomó posesión como ministro de Información y Turismo, pero sobre todo con la promulgación de la nueva Ley de Prensa e Imprenta, que afectó también, conviene no olvidarlo, al mundo de los libros. Asimismo la política de liberalización adoptada por Fraga afectó, si bien moderadamente, al mundo de los espectáculos como el cine, el teatro o incluso la televisión. Entre los sucesores de Fraga destacó

por su política atrevida Pío Cabanillas, ministro del ramo entre los meses de enero y octubre de 1974. Su laxitud en la aplicación de la ley y otros gestos públicos le granjearon los plácemes de extensos sectores de la prensa y la enemistad de buena parte de los sectores más inmovilistas del franquismo. El "búnker", tal como era conocido este grupo de presión, con el ex ministro falangista José Antonio Girón a la cabeza, lograron finalmente la defenestración de Cabanillas.

El balance globalmente positivo de esta ley no debe hacernos olvidar, sin embargo, que tuvo también consecuencias represivas en forma de numerosos castigos y sanciones a la prensa "díscola" o excesivamente atrevida. Un total de 1.270 expedientes administrativos por supuestas infracciones contra la Ley de la Prensa fueron incoados entre 1966 y 1975, de los que 389 correspondieron a diarios y 881 a revistas, si bien no todos acabaron en sanción [7]. Es más, la actividad informativa gozó de unas mayores garantías jurídicas, en comparación con la situación anterior a 1966, debido a la introducción del recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Ministerio de Información, lo que hizo que bastantes casos pudieran llegar hasta la última instancia del Tribunal Supremo [8]. Otros aspectos indudablemente positivos para la evolución más libre de la prensa fueron la abolición de la censura previa y de las consignas y el libre nombramiento de director por parte de las empresas periodísticas: cuestiones ambas que también tuvieron sus cortapisas al establecerse otros medios indirectos de control que actuaron a modo de sucedáneos de los antiguos [9].

Con todos los pros y los contras de la nueva situación, los hechos mostraron que, a la altura de 1975, cuando tras la muerte de Franco vaya a comenzar la transición política propiamente dicha, no se partía de cero en el campo de la libertad de prensa y del debate público de ideas. Se había recorrido ya un buen camino en cuanto a cotas de libertad de expresión alcanzadas, bastante superiores a las iniciales de 1966 aun sin ser todavía evidentemente totales ni muchísimo menos. Tan fue así que incluso por parte del Ministerio de Información se admitió en 1975 la necesidad de proceder a la reforma del tan largamente cuestionado artículo 2 de la ley Fraga, que establecía unos vagos e imprecisos límites a la libertad de información [10].

El "parlamento de papel" en que se había convertido la prensa aprovechando su privilegiado estatus de libertades, más avanzado que el de otros cauces oficiales, le convirtió además en un instrumento cada vez más utilizado por los propios políticos de cara a la promoción de sus ideas y de su posición. La previsible y cada vez más cercana desaparición física de Franco, sobre todo después de su primera enfermedad grave en el verano de 1974, llevó a los políticos más ambiciosos a intentar situarse en la mejor posición posible en el inminente posfranquismo. Y estos políticos y sus programas van a ser conocidos fundamentalmente a través de las páginas de los periódicos y mediante artículos firmados por ellos, entrevistas, noticias de sus actividades públicas y de sus conferencias, etc. Gente como Fraga, Areilza, Garrigues, los democristianos de Tácito, Cantarero y otros que tendrían un protagonismo importante en los primeros momentos de la transición, no eran unos ilustres desconocidos para la población lectora y cultivada, en gran medida debido a su presencia asidua en los periódicos del momento.

3. La "conversión democrática" de las empresas periodísticas

Hasta 1966 las empresas periodísticas apenas gozaban de autonomía. Al ser considerados los periódicos, tanto los del Movimiento como los de propiedad particular, como una especie de servicio público, las empresas editoras se veían sometidas a un intenso régimen de control de sus actividades. El régimen de censura y consignas les impedía a menudo llevar a cabo estrategias comerciales novedosas o diferenciadoras para sus productos periodísticos: la uniformidad era la nota informativa predominante en los años cuarenta y cincuenta. Los directores podían ser

impuestos por el ministerio, de tal manera que las empresas, en más de una ocasión, hubieron de soportar difíciles convivencias con personas que no eran de su confianza. Y, además, las inversiones para compra de maquinaria y otros materiales de talleres requería la pertinente autorización gubernativa, que solía conceder un trato de favor a la Prensa del Movimiento, al igual que en los cupos de papel [\[11\]](#).

Con la entrada en vigor de la ley Fraga, las empresas editoras ganaron en autonomía pero continuaron, de alguna manera, bajo la dependencia o la vigilancia por parte de la Administración. Desaparecieron algunas trabas importantes como el régimen de censura, lo que permitió un mayor dinamismo en los productos periodísticos y, por ende, en su comercialización. Pudieron las empresas, al fin, nombrar libremente a los directores de sus publicaciones, si bien la práctica aconsejaba buscar previamente el visto bueno de hecho del Ministerio. La adopción, por otra parte, de una política económica general menos proteccionista y más de libre mercado propició una menor dependencia respecto de las autorizaciones para inversiones. En definitiva, no sólo en el ámbito de la libertad de expresión sino también en el paralelo de la libertad de empresa se procedió a una apertura: controlada ciertamente pero apertura al fin y al cabo.

A pesar de que, en su preámbulo, la Ley de Prensa declaraba solemnemente que "libertad de expresión, libertad de Empresa y libre designación de Director son postulados fundamentales de esta Ley" [\[12\]](#), su articulado venía a desmentirlo o, cuanto menos, a matizarlo muy mucho. En efecto, la necesidad establecida de pasar por el filtro del creado Registro de Empresas Periodísticas (REP) hacía que el Ministerio pudiera denegar la inscripción de las empresas en dicho registro o cancelar la inscripción de una en funcionamiento. A tales efectos, el artículo 29 determinaba las causas posibles de denegación o cancelación, que básicamente se reducían a la inexactitud o las irregularidades en los datos que habían de figurar en la inscripción, relativos a la identidad de los accionistas y a los medios de financiación. Los poderes de la Administración llegaban a la facultad de "conocer cómo cubren sus déficit, si los tuvieran, las empresas periodísticas, así como a inspeccionar la contabilidad y las tiradas de sus publicaciones" [\[13\]](#).

Así, la solicitud de inscripción en el REP realizada por la sociedad Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) esperó inútilmente durante tres años la aprobación del Ministerio hasta que en septiembre de 1975, ya en los estertores de franquismo, el gobierno Arias dio su *placet* para que dicha empresa pudiera editar el diario *El País*. Algo parecido sucedió con otro diario emblemático, *Avui*, a cuya empresa editora, Premsa Catalana, S.A., los distintos gobiernos de los últimos años de la dictadura se negaron a otorgar su aprobación. Sólo con el primer gobierno de la monarquía y con la llegada de un periodista catalán como Carlos Sentís a un alto puesto de la Administración como la Dirección General de Coordinación Informativa se dio luz verde al proyecto de lanzar el primer diario en catalán desde la guerra civil. Años antes había fracasado, igualmente por silencio administrativo ante la solicitud, la iniciativa de los editores de *El Correo Catalán* para publicar un diario en catalán que iba a llevar por nombre *Migdia*. Otros proyectos quedaron en el aire aun antes de pedir su inscripción en el Registro [\[14\]](#): fue el caso de la posible conversión del semanario *Blanco y Negro* en diario vespertino a finales de los años sesenta, a la que el ministro Fraga se opuso rotundamente [\[15\]](#).

Más traumática aún resultaba la denegación de la inscripción en el registro, por lo que suponía de cese forzoso y brusco de la actividad informativa y empresarial. Fue un arma que se utilizó con alguna asiduidad: así se acabó, por ejemplo, con la vida del diario *Madrid* en noviembre de 1971, con la revista catalana *Presencia* en septiembre del mismo año, con el semanario *España Económica* por esas mismas fechas, o —caso pintoresco— con el diario *Nivel* el 31 de diciembre de 1969 nada más sacar su primer y único número. La vía del cierre empresarial se mostró mucho

más eficaz y expeditiva, como acoso a medios críticos molestos, que la del artículo 2 que permitía sancionarles con base en sus contenidos. Otras variantes, no propiamente contempladas en la ley, de la injerencia gubernativa en los medios escritos vía empresarial se produjeron en los casos de *El Alcázar* y la agencia de noticias Europa Press a finales de los años sesenta [\[16\]](#).

Todos estos casos y otros que no se mencionan demuestran que, a pesar del innegable mayor margen de acción de que dispusieron, las empresas periodísticas continuaron mediatizadas por el poder político, un poder —no debemos olvidarlo— del que dependían para seguir manteniendo el negocio, es decir, con el que habitualmente se buscaba estar en buenas o al menos no excesivamente tirantes relaciones. No extraña, pues, por ejemplo, que ante una radicalización del semanario catalán *Destino*, que le costó dos meses de suspensión en 1967, el conde de Godó, propietario de *La Vanguardia*, decidiera deshacerse de su participación en la revista para no enemistarse con el Gobierno. O que parte de los accionistas del diario *Madrid*, suspendido por cuatro meses el 31 de mayo de 1968, mostraran reticencias hacia la línea crítica del periódico y pensarán en cambiar al equipo directivo y orientador del periódico para evitar posibles suspicacias por parte del Gobierno.

La movilidad del mercado periodístico había sido mínima desde la posguerra. El número de diarios editados en España entre 1944 y 1975 se mantuvo habitualmente entre los 105 y los 120, con sólo ligeras oscilaciones. De los 48 diarios fundados entre 1936 y 1964, 36 pertenecían al Movimiento, lo que significaba que muy pocos empresarios privados lanzaron nuevos títulos de prensa diaria. A esto hay que sumar el hecho de que los dueños de la inmensa mayoría de los periódicos que siguieron editándose al término de la guerra militarón en el bando franquista, por lo que se ganaron el derecho a seguir publicando sus diarios [\[17\]](#). La mayoría, pues, de los empresarios de prensa eran afines al régimen de Franco y aunque tenían a veces quejas de tipo empresarial, como las antes reseñadas de uno de ellos, estaban básicamente cómodos y asentados dentro de él. La extensión geográfica de la Prensa del Movimiento, que alcanzaba en 1965 a 34 provincias españolas, en 13 de las cuales era el único diario que se editaba, aseguraba aún más esa alineación básica con el régimen.

A partir de 1966, con la apertura periodística propiciada por la Ley Fraga, el mayor pluralismo permitido a la prensa provocó un cierto resquebrajamiento de la unidad hasta entonces presente en este ámbito. Lo que era una forzada o voluntaria docilidad y afinidad básicas al poder establecido derivó, por mor de las nuevas circunstancias, en un pluralismo limitado que daba lugar a polémicas entre periódicos o a disconformidades con políticas llevadas a cabo desde los gobiernos. El aperturismo o criticismo de algunas publicaciones desató reacciones de incomodidad en sectores políticos oficiales. Ciertamente la reivindicación de mayores cotas de libertad de prensa, si no iban acompañadas de iguales consecuciones en otras libertades políticas, se antojaban complicadas. Y como fue esto lo que ocurrió, se descargó contra los periódicos la fuerza de la ley Fraga.

Por parte de la dictadura no se reconoció la libertad de prensa, ni la libertad de empresa: simplemente se toleró con límites, se concedieron márgenes de maniobra mayores pero insuficientes. Franco seguía sin creer en la bondad de los empresarios particulares de prensa. Su ideal era la prensa de propiedad pública: no se fiaba de la iniciativa particular, a quien a veces acusaba de esgrimir "la libertad para servir a sus bastardos intereses" [\[18\]](#) y no al interés nacional, al bien común. La libertad de prensa, en la mente de Franco, era sobre todo una libertad de propietarios que servían, por tanto, a intereses particulares.

La no existencia de un libre mercado hasta los años sesenta provocó, además, como consecuencias lógicas, un cierto atraso tecnológico, la deficiente comercialización de los productos informativos y

un consiguiente estancamiento en sus ventas. El hecho de que, además, fórmulas novedosas lanzadas en los aparentemente más favorables años sesenta (como la de *El Alcázar* de PESA y *Nuevo Diario* en Madrid, y *Tele/eXprés* y *Diario Femenino* en Barcelona) terminaran fracasando por distintos motivos, no constituían factores que estimularan precisamente a los editores de prensa.

El análisis o el repaso de los principales accionistas de los diarios privados de Madrid y Barcelona (los dos grandes mercados periodísticos) ayuda a comprender su pertenencia mayoritaria al *establishment* político y económico. Los Luca de Tena eran los propietarios de *ABC*, y no puede olvidarse el importante papel que desempeñó Juan Ignacio, el hijo del fundador, en los preparativos materiales inmediatos del alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Ya pertenecía mayoritariamente a la Editorial Católica, controlada por los obispos, y conocida es la presencia de la Iglesia española como uno de los poderes fácticos del régimen franquista. *El Alcázar*, cuyos orígenes datan del célebre asedio a la fortaleza toledana en la guerra civil, era propiedad de la Hermandad del Alcázar y, tras una época en que la explotación fue arrendada a otra empresa, volvió a manos de significados militares y civiles franquistas y, finalmente, a la Confederación de Ex Combatientes. *Nuevo Diario*, después de tres años en manos de una empresa con intereses básicamente periodístico-comerciales pero también financieros, pasó a ser controlada a finales de 1970 por la familia Oriol, de gran raigambre política y económica dentro del régimen. Y el vespertino *Informaciones*, tras haber sufrido diversos cambios de propiedad, pasó a manos de un grupo integrado por algunos bancos como el Santander y el Central y otros altos empresarios. Sólo el diario *Madrid*, cuando pasó a estar controlado por Rafael Calvo Serer como accionista mayoritario [19], presentó un cariz claramente crítico, lo que provocaría su cierre final en noviembre de 1971.

En la prensa barcelonesa ocurría otro tanto. El periódico líder, *La Vanguardia*, estaba en manos de sus propietarios tradicionales, los Godó, que lo recuperaron tras su incautación en la guerra civil. Otros dos diarios históricos, que hundían sus raíces en el siglo XIX, eran *El Correo Catalán* y *El Noticiero Universal*. El primero tenía como accionistas principales a diversas familias de empresarios e industriales textiles, más algunos carlistas; el segundo era propiedad de una familia de notable raigambre periodística como la Peris-Mencheta. El *Diario de Barcelona* pertenecía, hasta su muerte en 1974, a Miguel Mateu, destacado empresario que llegó a ser también alcalde de la ciudad condal. Y el nuevo periódico creado en 1965, *Tele/eXprés*, fue una iniciativa en la que se involucraron importantes hombres de empresa y a veces también políticos como Jaume Castells, Juan Antonio Samaranch y Joaquín Viola, y escritores y periodistas como Ignacio Agustí y Carlos Sentís. En los cambios de propiedad que se registraron en estos periódicos, ya en los años setenta, siguieron predominando los hombres de extracción social alta como Josep Maria Santacreu y Carlos Ferrer Salat, que entraron en *Diario de Barcelona*, o José María Porcioles hijo, que se hizo con *El Noticiero Universal*. Destacado socio también, pero con una orientación ideológico-política crítica fue Jordi Pujol cuando entró en *El Correo Catalán*, el más catalanista y abierto durante muchos años [20].

El cambio del panorama político tras la muerte de Franco y la progresiva andadura, primero tímida y luego ya decidida, hacia un régimen democrático, hizo que la prensa en general, y los empresarios en particular, viraran hacia esa nueva dirección que tomaba la vida política española. Dicho con otras palabras, la afinidad básica anterior hacia el franquismo se fue convirtiendo en una adecuación prudente a los nuevos tiempos. Si bien con alguna excepción, los periódicos que antes, en mayor o menor grado, apoyaron la dictadura fueron convirtiéndose en impulsores del cambio democrático. Es lo que podemos llamar la "conversión democrática" de los empresarios de prensa.

No fue, desde luego, una conversión súbita sino, por lo general, prudente, cautelosa y gradual. Adoptó, en los distintos casos, velocidades diferentes pero casi todos acabaron subiéndose al carro de las reformas democráticas. Puede servir de muestra el ejemplo de un periódico tan significativo como *ABC* que, en las semanas posteriores a la muerte de Franco, se resistía a mencionar en sus editoriales la palabra "partidos políticos", clásico tabú durante la dictadura. También expresó este periódico sus reticencias a la configuración del Estado de las autonomías, pero acabó aceptándolo democráticamente.

A partir de 1976, la aparición de nuevos diarios y empresas periodísticas, de cariz por lo general más avanzado o izquierdista en lo ideológico-político, empujó a los diarios más tradicionales e históricos a adoptar posturas políticas más abiertas y acordes con los tiempos. Tanto en sus contenidos como en su presentación externa, diseño y fórmula periodística escogida, estos nuevos productos informativos comenzaron a marcar la pauta y a provocar la crisis en muchos de los antiguos. A la necesidad de adaptación política se hubo de unir la necesidad de adaptación periodística y empresarial si querían continuar consiguiendo beneficios, rentabilidad comercial en suma.

Cabe detectar, pues, en la conversión democrática de las empresas periodísticas privadas un fuerte componente de pragmatismo, situado bastante por encima, en términos globales, del factor de la convicción ideológica. Todo ello derivado de los condicionantes políticos que inevitablemente marcaban sus relaciones con el poder.

4. La "conversión democrática" de los periodistas

No fueron, ni mucho menos, tan abundantes los periodistas que, durante el tardofranquismo, batallaron decididamente por el advenimiento de las libertades, la de expresión en primer lugar. Sólo desde los reductos de algunas pocas publicaciones hubo profesionales de la información que se atrevieron a plantar cara, de modo más o menos subrepticio pero real, a la dictadura. A pesar de que muchos luego hayan reclamado para sí esa condición, la verdad es que en la mayoría de los casos los periodistas —algunos por apoliticismo, otros por afán de no complicarse la vida y garantizarse su necesario puesto de trabajo, y otros por convicción— no militaron contra el franquismo. No obstante, más de uno quisieron reescribir la historia mostrándose como adalides de dichas libertades. Es lo que Félix Santos llamó con ironía "una masiva y portentosa transmutación por la que muchos de los dóciles, de los cómplices, de los pasivos e incluso algunos de los enfervorizados exegetas se convirtieron en 'antifranquistas' y 'demócratas de toda la vida'" [\[21\]](#).

Con respecto a sus empresarios, los periodistas mostraron diferencias como su mayor dinamismo, procedente en muchos casos de su juventud, y su sentido de mayor independencia frente al poder político, dadas las menores ataduras y responsabilidades económicas que presentaban. Factor clave fueron las nuevas hornadas de periodistas jóvenes que comenzaron a entrar en las redacciones y que poseían una mentalidad distinta a las de sus otros compañeros de trabajo por pertenecer a una generación que no había vivido la guerra civil [\[22\]](#).

Algunos de estos grupos efectuaron, ya durante los años del tardofranquismo, una notable toma de conciencia profesional de sus derechos y de su capacidad de influencia. Dos muestras claras de estos nuevos aires, propiciados también por la apertura derivada de la Ley Fraga, fueron la creación del *Grup Democràtic de Periodistes* en Barcelona y la aglutinación de un sector crítico, minoritario pero activo, en la Asociación de la Prensa de Madrid. Otras dos realizaciones que encontraron cierto eco fueron la creación de una Asociación de Redactores del diario *El Alcázar* en 1968 y de la Sociedad de Redactores del diario *Madrid* en 1971: ambas tuvieron como común denominador el

hecho de que fueron fundadas en situación de crisis de ambos periódicos como intento de salvaguardar los derechos de los periodistas afectados.

El *Grup Democràtic de Periodistes* comenzó a funcionar el mismo mes de abril de 1966 en que entraba en vigor la nueva Ley de Prensa. En su documento fundacional se configuraba como un "instrumento de fomento y defensa de los ideales democráticos en el ámbito de los medios de comunicación social", y se fijaba como campos de actuación la "transformación de instituciones profesionales de acuerdo con ideales democráticos y para conseguir la independencia de la Administración y de las empresas" y el "apoyo a las acciones inspiradas en los mismos principios" [23]. Organización por supuesto ilegal, actuó a modo de grupo de presión en el seno de la Asociación de la Prensa de Barcelona y defendió a cuantos profesionales se vieron en apuros de tipo jurídico-político. Nombres como Josep Faulí, Josep M^a Cadena, Amparo Moreno, Enric Sopena, Xavier Vinader, Josep Gifreu y Anna Balletbó fueron, entre otros, miembros de este grupo catalán abiertamente prodemocrático.

Unos pocos periodistas jóvenes también se organizaron a modo de grupo de presión dentro de la Asociación de la Prensa de Madrid. Miguel Angel Aguilar, Enrique Bustamante, César Alonso de los Ríos y María Antonia Iglesias, entre otros, constituyeron un frente a través del cual sometieron a un estrecho marcateje la gestión del presidente Lucio del Alamo y lucharon en pro de una mayor democratización y de un mayor dinamismo de las escleróticas estructuras de las Asociaciones de la Prensa y de su Federación Nacional [24].

El intento más serio de toma de conciencia profesional en el seno de la redacción de un periódico fue el surgido en el diario *Madrid* con la formación, el 22 de octubre de 1971, de la Sociedad de Redactores. Dada la exclusividad de la representación de los intereses de los trabajadores que se arrogaba la Organización Sindical, este colectivo de periodistas se vio obligado a adoptar una curiosa fórmula jurídica de sociedad civil, sin ánimo de lucro y sin necesidad de ninguna aprobación pública más que la del notario ante la que se constituyese [25]. En su declaración fundacional, formulada el 14 de agosto de ese mismo año, se proclamaban principios de un tenor muy avanzado, como los siguientes:

"Estamos convencidos de que la prensa es libre cuando no depende del poder gubernamental ni de los poderes del dinero, sino de la conciencia de los periodistas y de los lectores (...)

Hemos llegado a la conclusión de que nuestra responsabilidad de informadores nos da derecho a participar y controlar todas las decisiones importantes susceptibles de acrecentar o disminuir la independencia del periódico y la calidad de la información. La redacción de un diario no puede ser tratada como una aparcería que se compra o se vende sin su consulta y que pasa así de un dueño a otro sin ninguna explicación. (...)

Una empresa de prensa no es una empresa económica como las otras, regida únicamente por las reglas del derecho comercial. Una empresa de prensa debe responder primeramente a las exigencias del 'servicio' de interés público que es la médula de la información, de la que los periodistas asumen, cada uno en su campo, la responsabilidad intelectual y moral. De aquí nace *el derecho moral que tienen a participar, mediante la posesión de una parte de la copropiedad, en las grandes decisiones que se tomen en las empresas de prensa, encaminadas a garantizar y reforzar la independencia y la calidad de los órganos que publican*" [26].

Ya en los años propiamente dichos de la transición, y por lo tanto en un contexto político diferente, la plasmación quizás más sobresaliente de la creciente toma de conciencia profesional periodística

fue el Estatuto de la Redacción del diario *El País* aprobado en 1980. Bien es cierto que, al igual que sucediera en los casos de las sociedades de redactores de *Madrid* y *El Alcázar*, su gestación fue impelida por una situación de crisis interna en el periódico, en este caso la división surgida en el seno de la empresa por la orientación del diario. Los accionistas mayoritarios se aliaron con la redacción para asestar, mediante la aprobación de dicho Estatuto, un golpe al sector crítico, de cariz político e ideológico más conservador. Al otorgar más poder a la redacción, que era afín a los planteamientos del sector mayoritario, los accionistas disidentes quedaron todavía más desplazados y con menor posibilidad de influencia en los contenidos [\[27\]](#).

Un factor crecientemente decisivo en la que hemos llamado "conversión democrática" de los periodistas vino dado por el relevo generacional que se fue produciendo en las redacciones. El paso del tiempo hizo que aquellos periodistas que estuvieran en primera fila en la inmediata posguerra fueran dejando su lugar a otros más jóvenes que no habían tenido esa misma experiencia vital y cuya mentalidad era, por lo general, bastante distinta y más abierta. Además, alguna escuela de Periodismo como la del CIC en Barcelona, dependiente de la Iglesia, fue especialmente foco de agrupamiento de jóvenes periodistas con ideas democráticas [\[28\]](#). Y el comienzo del funcionamiento de las Facultades de Ciencias de la Información en 1971 contribuyó a una formación más universitaria —y menos politizada que con la Escuela Oficial de Periodismo— de los que llegaban luego a la profesión: factor que incidió también positivamente en la mayor autonomía periodística en los años de la Transición [\[29\]](#).

De modo paralelo a estas mayores tomas de conciencia profesionales, también los empresarios de prensa, una vez desaparecidos los sindicatos franquistas que agrupaban a editores, redactores y demás trabajadores, se organizaron como grupo de interés en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) en febrero de 1978. En palabras de su presidente, Pedro Crespo de Lara, se constituyó "con dos propósitos fundamentales: defender la independencia ideológica y económica de la empresa periodística como presupuesto necesario de la libertad de prensa, y hacer frente a los graves problemas de la crisis económica que padecen los periódicos. O lo que es lo mismo, se disponían los empresarios a adecuar su ánimo y las estructuras de sus empresas a las exigencias que sobre la prensa pone la nueva situación política española" [\[30\]](#).

Frente a las mayores dosis de pragmatismo que rodeó a la evolución democrática de los empresarios, en el caso de los periodistas, y dados los factores mencionados, hubo una mayor intervención de la convicción ideológica, lo que no quita, como dijimos anteriormente, que en muchos casos se obrara también por pragmatismo o por pura conveniencia o interés [\[31\]](#).

5. La libertad de expresión como factor coadyuvante

A este nuevo estado de cosas en los ámbitos empresarial y periodístico ayudó, sin duda, la mayor libertad de expresión que, con el paso del tiempo y paralelamente a la evolución política, se fue estableciendo y garantizando por parte de los poderes públicos. En efecto, el primer gobierno Suárez aflojó su presión sobre los periódicos y las empresas mediante diversas medidas legales hasta que la Constitución de diciembre de 1978 sancionó definitivamente la libertad de información y la elevó al rango de derecho fundamental.

En el ámbito de la prensa escrita las decisiones fundamentales fueron tomadas el primero de abril de 1977, día de evidentes resonancias históricas para el franquismo [\[32\]](#). Mediante un real decreto se abolieron o modificaron algunos aspectos de la Ley de Prensa como el artículo 2, las facultades de suspensión de periódicos y el secuestro administrativo salvo en cuatro casos. Asimismo, la supresión ese mismo día del Movimiento Nacional produjo la conversión, meses después, de la

cadena de Prensa del Movimiento en los MCSE. Al mismo tiempo, desaparecía un ministerio tan eminentemente político e impropio de regímenes democráticos como el de Información y Turismo, pasando sus competencias a uno recién creado como el de Cultura y al de Comercio.

Especial significación, por su contenido, tuvo el preámbulo del primero de los decretos citados, por cuanto venía a representar el primer reconocimiento jurídico-legal claro de la libertad de expresión. Bien es cierto que sólo lo podía ser de una manera provisional hasta que una norma de mayor rango jurídico, como sería la Carta Magna de 1978, lo reconociera de una forma más solemne. Pero sirvió en su momento para despejar las dudas sobre la voluntad democratizadora del gobierno Suárez en unos momentos tan cruciales como los inmediatamente previos a la celebración de las primeras elecciones generales. "El derecho de todos los ciudadanos (...) a la libre información — comenzaba su preámbulo— (...) es principio fundamental de todo Estado de derecho". Y se hablaba de la libertad de información como exigencia de la "conurrencia democrática" [33].

La Constitución aprobada por referendo popular recogió en su artículo 20 el derecho a la libertad de expresión y "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Lógicamente la promulgación de esta carta magna hizo que el decreto de 1 de abril de 1977 quedara derogado. Una vez cumplida su función como puente hacia la sanción máxima del derecho a la información que suponía su inserción en la Constitución, ya no tenía sentido. Para las empresas periodísticas también tuvo importancia el artículo 38 que reconocía "la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado", lo que venía a hacer muy difícil la injerencia estatal directa en la vida de dichas sociedades.

Con este nuevo marco jurídico, las empresas periodísticas y los periódicos ya no se vieron sometidos a un régimen jurídico-administrativo especial sino al común, como venían persiguiendo hacía tiempo. Pero así como el poder ejecutivo perdía muchas de las armas que anteriormente podía esgrimir contra la prensa, el poder judicial continuó actuando sobre la actividad periodística y con criterios a veces discutibles. Ejemplo paradigmático fue la sentencia de tres meses de cárcel que el Tribunal Supremo dictó en 1980 contra Juan Luis Cebrián, director de *El País*, a raíz de un editorial en el que criticaba a la Justicia española. La razón era una sentencia de larga inhabilitación profesional a una periodista que había introducido portadas pornográficas en una revista que dirigía. En dicho editorial, publicado en abril de 1978, *El País* consideraba que había aún muchos jueces franquistas que, además, estaban habituados a funcionar con unas leyes no democráticas [34]. Cebrián fue condenado por un supuesto delito de desacato.

El proceso de transición operado en campos como la política, la sociedad y los medios de comunicación tardó más en llegar a estamentos de raigambre más corporativista y tradicional como la Justicia y el poder militar. Según recogió la revista *AEDE*, editada por la Asociación del mismo nombre, entre 1977 y 1980 se incoaron más de cien procesos contra periodistas en los tribunales, si bien la mayoría concluyó con fallos absolutorios [35]. Los viejos hábitos todavía perduraban en parte de la clase política y judicial.

6. Nueva situación política, crisis económica y nuevos problemas para las empresas

A partir de 1976 se registró en España una eclosión de periódicos, una fiebre de iniciativas publicísticas que surgían al calor de los nuevos y más libres tiempos. Se trata de una lógica tendencia, de una especie de ley histórica que nunca falla en las transiciones de un régimen de autoridad a otro más democrático o liberal. Existía, entre el mundo de los editores, la esperanza de que la nueva etapa que parecía comenzar conllevaría inevitablemente un aumento en el consumo de los medios de comunicación. Y ciertamente fue así en los más baratos o de más fácil acceso para el

ciudadano como la radio y la televisión (precisamente aquellos en los que la iniciativa privada se encontraba con menores o con nulas posibilidades de actuación), pero no ocurrió lo mismo, ni en términos globales ni en términos comparativos, con los medios impresos.

Apenas aumentó el número de lectores de prensa entre 1975 y 1982. El índice de ejemplares de diarios vendidos por mil habitantes seguía, a mediados de los años ochenta, sin llegar a la cifra de 90: lejos, por tanto, todavía de los 100 que marcaban el límite del subdesarrollo cultural en materia de lectura de prensa, según los criterios de la UNESCO. A los muchos nacimientos de periódicos y revistas correspondió una cifra igualmente alta de cierres tanto de antiguos títulos como de nuevos. La oferta desbordaba a una demanda que se comprobó no era tan intensa como se predecía. Publicaciones que tanto se significaron en el tardofranquismo por su carácter crítico y combativo, como *Triunfo* y *Cuadernos para el Diálogo*, se vieron finalmente obligadas a cerrar, haciendo cierto aquel irónico dicho que empezó entonces a estar en boca de más de uno: "contra Franco vivíamos mejor".

En bastantes ocasiones hubo falta de fundamentos empresariales serios en las iniciativas periodísticas que se lanzaron a la calle. Se confiaba demasiado en los efectos benéficos de la apertura y la democratización política pero, aun siendo éste un factor que en algunos casos ayudó, debía ser complementado por otros, derivados del propio mercado específico de la prensa y del contexto económico general. Así, la falta de previsión comercial y de estudios de mercado provocó que muchas publicaciones gozaran de una existencia más bien efímera. La llegada de la democracia no lo solucionaba todo como por encanto.

De este modo, se terminó hablando con razón de una crisis de la prensa diaria durante los años de la Transición, cuyas causas pueden sintetizarse en cuatro enunciados: la crisis económica generalizada que vivió el país, la mayor competencia procedente de otros medios, el atraso tecnológico y las plantillas sobredimensionadas con que se hallaron muchos periódicos tradicionales, y un cierto cansancio progresivo de los lectores ante la excesiva politización de la prensa.

La crisis económica derivada del aumento del precio del petróleo en 1973 afectó a España, sobre todo, a partir de 1975, y tuvo como consecuencias, en el ámbito de los negocios de prensa, el aumento de los costes de producción y una importante recesión publicitaria. Una materia prima tan vital como el papel se encareció de forma notable, y los gastos de personal, por efecto de la inflación, crecieron considerablemente. Costaba más dinero hacer los periódicos y, al mismo tiempo, disminuían los ingresos por publicidad —dada la menor capacidad inversora de los anunciantes—, lo que obligaba a subir el precio de venta a un público cuya capacidad adquisitiva se veía, además, mermada por la coyuntura de crisis. Todo ello era como una pescadilla que se mordía la cola.

La radio y la televisión, al contrario que la prensa, experimentaron un notorio auge de audiencia, lo que vino a suponer también una mayor competencia publicitaria para los medios escritos. La televisión pública, única existente, confirmó la tendencia ya apuntada desde los años sesenta y se convirtió en el medio de masas por excelencia, con una creciente atracción publicitaria. Si en 1976 la televisión absorbía el 18,9% de la tarta de la inversión publicitaria, en 1981 el porcentaje se había elevado al 26,6%. En cambio, en el mismo período, la prensa diaria vivió un cierto estancamiento, pasando del 25 al 24,2%. Y la radio no se quedó atrás: su espectacular despegue como medio informativo ágil y popular, después de décadas consagrada al entretenimiento y el espectáculo, le llevó a pasar de 7 a 17 millones de oyentes entre 1975 y 1982, según datos del Estudio General de Medios (EGM). Este incremento de audiencia se dejó notar en el mayor

volumen de inversión publicitaria que recibió: su 6,2% de 1976 se convirtió en un nada despreciable 10,1% en 1982 [36]. Asimismo, la aparición de un buen número de revistas de información general y otras especializadas hizo diversificarse la oferta en el ámbito de la prensa escrita y perjudicó, en alguna manera, a los diarios.

Señal inequívoca de la conciencia de estancamiento y crisis por parte de los empresarios de prensa diaria fue el interés creciente que mostraron por estar presentes en los otros medios de comunicación. Interés que se hizo efectivo en las abundantes solicitudes de concesión de emisoras FM que presentaron las empresas periodísticas cuando el Gobierno abrió el concurso público en 1981. Y ya desde algunos años antes, tanto algunas empresas periodísticas concretas como la AEDE en cuanto asociación presionaron al Gobierno para que regulara e hiciera posible la televisión privada en España. Comenzaron, pues, a dar los primeros pasos para estar presentes, en solitario o agrupadas con otros socios, en la radio y en la televisión.

Un factor que incidió negativamente en bastantes periódicos veteranos o históricos fue la obsolescencia tecnológica que presentaba su maquinaria y utillaje, insuficiente para competir con los nuevos modelos de periódicos que, dotados de medios más modernos, podían ofrecer mejores productos. El hecho de que esta necesidad de reconversión les pillara justo en momentos de crisis económica general y, por tanto, en momentos complejos para poder proceder a planes de ese estilo debido a la precariedad de recursos, agravaba la situación. Además se les presentaba otro obstáculo complementario: la carga que representaba sostener a plantillas muchas veces sobredimensionadas, debidas a políticas de empresa de tipo paternalista y poco adecuadas a un mercado cada vez más exigente. Periódicos de tanto renombre en el panorama nacional como *ABC*, *Ya* y *La Vanguardia* experimentaron estos problemas.

Desde el punto de vista del lector y del producto periodístico en sí, la excesiva politización de la prensa diaria, lógica dados los acontecimientos que vivía España desde 1975, acabó sin embargo produciendo un cierto rechazo por su reiteración. Una sensación de cierto hartazgo se apoderó del lector medio cuya ilusión e interés por los asuntos políticos se iba perdiendo. Los índices de participación electoral, desde aquellas primeras citas del referéndum de la Ley para la Reforma Política y de las elecciones generales de junio de 1977, fueron descendiendo hasta tal punto que comenzó a hablarse del "desencanto" popular hacia la democracia. Un proceso paralelo pudo observarse en la prensa.

A la vista de todos estos condicionantes, no resulta extraño que un estudio realizado sobre el mercado periodístico estimara que, a la altura de 1979, sólo 15 de los 85 diarios no estatales resultaban rentables, mientras que 20 simplemente cubrían gastos y 50 eran deficitarios [37]. La supuesta idílica situación que se avecinaba no fue tal ni mucho menos. Esa fue una de las razones por las que las empresas periodísticas clamaron por el mantenimiento de las subvenciones a la prensa escrita. Ciertamente es que esgrimieron también como argumento político para lograr dichas ayudas la necesidad de salvaguardar el pluralismo en una democracia aún incipiente y poco madura como la española. Pero en el fondo pedían una especie de proteccionismo oficial ante las dificultades especiales que estaba viviendo la industria periodística.

En este sentido, no dejaba de resultar una cierta contradicción interna la exigencia continua de la no intervención del Estado como empresario de prensa (la disolución de los MCSE fue una de las peticiones más reiteradas de la AEDE y de los periódicos privados) y, al mismo tiempo, la solicitud de su intervención en forma de ayudas económicas para el mantenimiento de sus propias empresas periodísticas. No sin ciertas dosis de ironía, algunos criticaban ya por aquel entonces el "fatalismo reiterado" de que hacían gala los editores, en cuyas reuniones "sólo se trataba de abrirse paso hasta

el presupuesto general del Estado" [38]. Durante los gobiernos de la UCD estas ayudas se siguieron concediendo aunque sin criterios claros establecidos, lo que motivó más de una polémica sobre posibles favoritismos [39].

7. Las implicaciones políticas de los empresarios de prensa

La imbricación de los poderes políticos y económicos, máxime cuando anda por medio otro importante e influyente poder como es el de la información, se puso de manifiesto en diversos episodios que tuvieron como escenarios y protagonistas a los periódicos de la Transición y a sus empresas. Las épocas de cambios políticos se hacen siempre más proclives a la inestabilidad y las crisis internas en el seno del mundo de la información, y más todavía con el ingrediente añadido de las dificultades económicas. Los diarios y sus empresas tienen sus principios editoriales, y los editores y propietarios tienen también sus ideas y su red de relaciones con el poder político y los poderes económicos. Todos estos son factores que, aunque pueden no condicionar de forma absoluta a un periódico, se deben tener en cuenta a la hora de analizar su historia [40].

Hubo algunos diarios que desaparecieron fruto del abandono empresarial en el que se vieron sumidos. Fueron casos en los que podría hablarse, con propiedad, de que los empresarios de prensa actuaron contra sus propios periódicos, prefiriendo darles el cerrojazo o dejarles morir antes que tener que identificarse con la línea editorial más avanzada que estaban adoptando. Con distintas variantes, esto ocurrió con los madrileños *Nuevo Diario* e *Informaciones* y con el decano de la prensa diaria continental *Diario de Barcelona*.

Nuevo Diario, que había nacido en septiembre de 1967 al calor de la ley Fraga, fue vendido a Prensa Económica, S.A. en diciembre de 1970. Entre los nuevos propietarios —la mayoría de ellos importantes familias del poder político y económico del franquismo— ocuparon un papel director los Oriol. Entre 1970 y 1975 su falta de garra y de identidad periodística le hizo deambular por unos niveles más bien bajos de difusión y de influencia. Con el nombramiento en 1975 del conocido periodista Manuel Martín Ferrand como director se intentó darle ese dinamismo que le faltaba. Y a fe que el nuevo director comenzó a conseguirlo si bien a costa de abrir el periódico a la nueva situación política que parecía se iba a inaugurar con la muerte de Franco, como realmente así sucedió. Esta línea alarmó a la familia Oriol, que mantenía importantes vínculos con el *establishment* del franquismo [41]. No queriendo aparecer públicamente como sostenedores de unas interpretaciones políticas e ideológicas no acordes con sus planteamientos e intereses, a comienzos de 1976 prefirieron cerrar el periódico aludiendo a dificultades de tipo económico que, en efecto, pendían sobre la empresa pero que podían ser subsanables y corregibles si el producto lograba continuar su marcha ascendente recién incoada. Pero no hubo voluntad empresarial para solucionarlo, después de fallidos intentos de venderlo a otros grupos.

Un proceso similar sucedió en torno al veterano vespertino *Informaciones*. Después de pasar por diversas manos sin conseguir excesivo éxito, en 1968 se produjo su relanzamiento por parte de un grupo empresarial y financiero en el que estaban presentes, directamente o a través de personas interpuestas, algunos bancos como el Santander y el Central y otros empresarios. Tras el fallido fichaje de Emilio Romero para pilotar el periódico, tomó las riendas otro de los hombres de Romero en *Pueblo* como Jesús de la Serna, quien se llevó como subdirector al joven Juan Luis Cebrián. A base de un modelo de diario anglosajón, bien dotado informativamente, serio y de corte liberal y aperturista, *Informaciones* creció a lo largo de los primeros años setenta hasta convertirse en un rotativo prestigioso y alcanzar más de 70.000 ejemplares de venta diaria media. Pero sus principales accionistas comenzaron a marcar distancias con él. Ya en 1974 el Banco Santander se deshizo de su participación dado que, según dijo uno de sus representantes a la revista económica

Doblón, "teníamos que sufrir constantemente la identificación de las posturas de nuestra entidad con las del periódico" [\[42\]](#).

Esto fue sólo un anuncio de lo que sobrevendría después de 1975. Ni Prensa Española, editora de *ABC* que compró la participación del *Santander*, ni el resto de los socios se atrevió a dar la cara por un periódico que, aunque bien situado por su relanzamiento, necesitaba urgentes inversiones para su modernización (su rotativa Winkler databa de antes de la guerra civil y ya no se fabricaban repuestos) y para poder competir con los nuevos diarios que le disputaban cuotas de mercado. Al igual que hiciera el *Santander*, el resto de los propietarios dejaron al periódico en vía muerta pese a los esfuerzos de los profesionales por sacarlo adelante. El ejercicio de 1977 fue así el primero que registró pérdidas en esta etapa y el comienzo del fin. Un fin que llegaría de la mano de un peculiar empresario, Sebastián Auger, que lo compraría en 1979 por una peseta y acabaría cerrándolo, junto con otros periódicos de su propiedad, en 1980.

El caso del *Diario de Barcelona*, el viejo "Brusi" de 1792, mostró también algunos rasgos paralelos. Propiedad del empresario y político catalán Miguel Mateu, a la muerte de éste en 1972 pasó a manos primero de Arturo Suqué y luego, a mediados de 1975, de Josep M^a Santacreu. Éste, a partir de 1977, confió la dirección a periodistas de cariz bastante derechista o incluso de extrema derecha como Juan Merino, antiguo director de un diario de parecida significación como *El Imparcial* madrileño. La fórmula sensacionalista que adoptó Merino, contraria al estilo moderado clásico del diario, si bien consiguió levantar un poco las ventas del decaído Brusi, no satisfizo a Santacreu, que había abandonado al periódico a su propia suerte. Expresivas eran las palabras que, un día de enero de 1980 y en la portada del propio *Diario*, le dedicó Merino a su patrón bajo el titular "¿Dónde está el señor Santacreu?": allí le acusaba sin ambages de ser "un empresario que abandona el timón" [\[43\]](#). En estado de casi total desahucio y dimitido su director, los trabajadores y un grupo de periodistas se hicieron con el *Diario* y lo mantuvieron en régimen autogestionario hasta 1984, año en que el Ayuntamiento de Barcelona compró la histórica cabecera [\[44\]](#).

Otros periódicos, incluidos los más relevantes del mercado madrileño y barcelonés, sufrieron también complicaciones y dificultades derivadas de implicaciones políticas de sus propietarios y accionistas. Así, en *ABC* se libró una batalla interna entre un sector más conservador, como el representado por los consejeros Torcuato Luca de Tena y José María Ruiz Gallardón y el periodista Pedro de Lorenzo, y un sector de carácter más centrista encabezado por el presidente de Prensa Española, Guillermo Luca de Tena y su cuñado y consejero de la empresa Nemesio Fernández Cuesta. Una clara plasmación de esta rivalidad tuvo lugar en las elecciones generales de 1977, donde Torcuato Luca de Tena y Nemesio Fernández Cuesta se presentaron como candidatos por Alianza Popular y Unión de Centro Democrático respectivamente. Finalmente, y por ironías del destino, ninguno de los dos resultó elegido y fue, sin embargo, el hermano menor de Torcuato, Guillermo, quien llegó a ser senador por designación regia.

No sólo en esos altos niveles sino también en la propia redacción del periódico se distinguían esas dos corrientes, lo que daba lugar a faltas de coherencia interna en su orientación que contribuían a sembrar el desconcierto y a la creciente bajada en su difusión. Elocuente fue el episodio que ha narrado Pedro J. Ramírez, entonces redactor del periódico monárquico, acerca del tratamiento informativo bastante parcial que *ABC* dio a la concentración en la Plaza de Oriente en el cuarto aniversario de la muerte de Franco [\[45\]](#). Y es que había influyentes personas dentro del periódico "que consideraban que *ABC* debía seguir siendo ante todo la trinchera de la España que se batía en retirada frente a los cambios democráticos" [\[46\]](#). Y esto contrastaba con el esfuerzo del otro sector por abrir el veterano rotativo a los nuevos tiempos de libertad.

También en el seno de periódicos que cosechaban un inusitado éxito comercial llegaron las desavenencias entre núcleos de accionistas por motivos políticos. Fue el caso de PRISA, sociedad editora del diario *El País*, donde un sector de accionistas políticamente más conservadores y cercanos a AP y a UCD unieron sus fuerzas para presionar a un sector mayoritario favorable a la línea de centroizquierda prosocialista que, cada vez con mayor nitidez, estaba adoptando el periódico. Fueron entre otros Julián Marías, Fernando Chueca, Jaime García de Vinuesa y, en la sombra, Manuel Fraga quienes apadrinaban e impulsaban este movimiento interno crítico, que tuvo al periodista y miembro del equipo fundacional de *El País*, Darío Valcárcel, a uno de sus principales animadores y maniobreros.

Como quiera que no llegaran a alcanzar una proporción numérica suficiente para hacer valer sus tesis, y que además el diario iba dando cuantiosos beneficios y se había situado como líder del mercado, su presión no surtió efecto; antes al contrario, sirvió para que el sector mayoritario se fortaleciera y para que la redacción, acaudillada por su director Juan Luis Cebrián, se adhiriera al consejero delegado de la empresa, Jesús de Polanco, e hiciera frente común ante los críticos. El antes mencionado Estatuto de la Redacción de 1980 supuso una clara victoria en este sentido y el preludeo del posterior abandono y venta de acciones de los disidentes a los socios mayoritarios entre 1982 y 1983.

Algo confuso todavía se presenta el caso de *Diario 16*, otro de los rotativos emergentes en los primeros momentos de la transición. Sus resultados económicos negativos, fruto de la falta de previsión y de un fundamento empresarial poco sólido, hizo que a la altura de 1979, al poco tiempo de su fundación, necesitara inyecciones económicas urgentes. Varios testimonios apuntan a que UCD, el partido entonces en el poder, se hizo con cerca de un 40% de INPRESA, la sociedad editora del diario, convirtiéndose dos militantes centristas, Federico Ysart y Javier Rupérez, en miembros del Consejo de Administración. [47]. Bien es cierto que ya antes, incluso desde su fundación, eran accionistas y consejeros de la empresa algunos hombres que luego pertenecieron al partido centrista. Esta dependencia económica no era óbice, sin embargo, para que el diario mantuviese posiciones críticas con la UCD, como por ejemplo con motivo de la dimisión de Suárez a comienzos de 1981.

En la prensa barcelonesa hubo también varios periódicos que sufrieron vaivenes por mor de los intereses políticos de sus editores o propietarios. *El Noticiero Universal*, que había sido comprado en 1973 por José María Porcioles, hijo del hasta un año antes alcalde de Barcelona del mismo nombre, fue traspasado en 1980 a Aurelio Delgado, cuñado de Adolfo Suárez, con lo que cayó en la órbita de UCD. Con la debacle y posterior disolución de la UCD, en 1984 sufrió un nuevo cambio de propiedad que lo acercó a Alianza Popular. Tantos devaneos incidieron lógicamente en la falta de identidad propia y coherencia, en su pérdida de credibilidad y por tanto en un descenso de ventas que acabaría con su vida en octubre de 1985 [48].

Un importante personaje político que buscó influencias mediante la participación en medios de comunicación fue Jordi Pujol. A través de Banca Catalana, ya en 1970, estuvo presente en la revista *Orifloma*, de la que se desprendió en 1972 para vendérsela al líder democristiano Antón Cañellas. Operaciones semejantes de desembarco de Pujol en medios impresos sucedieron con las revistas *Canigó* y *Destino*, y con el veterano diario *El Correo Catalán*. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas consiguió éxito; es más, se saldaron con distintos incidentes y desavenencias entre los periodistas y los delegados u hombres de confianza de Pujol en dichos medios. En el caso de *El Correo* se acumularon además crecientes problemas económicos por los que la empresa no acababa de dar la cara, de tal forma que en noviembre de 1985 decidió cerrar su edición. Si bien no de igual modo, hubo otro diario sobre el que Pujol ejerció una fuerte influencia: el emblemático *Avui*, al que

dotó de abundantes subvenciones desde su llegada a la presidencia de la Generalitat en 1980. Era el único modo de mantener un diario en catalán que no lograba sobrepasar apenas los 40.000 ejemplares de venta media.

El futuro no resuelto de los MCSE fue otro episodio en torno al cual se suscitaron intereses políticos claros. La UCD, plenamente partidaria de su privatización mediante subasta pública, intentó que la mayoría de dichos diarios quedaran bajo control de empresarios afines a sus siglas. De ahí su interés en aprobar la ley correspondiente y proceder a la subasta antes de la convocatoria de las terceras elecciones generales. El primer paso sí se consiguió, no así el segundo, que le cupo organizar al primer gobierno del PSOE: un partido que se había caracterizado hasta entonces por su oposición a la privatización y que, una vez en el poder, no dudó en intentar hacerse con el control de los más rentables [\[49\]](#).

8. *Las dificultades de adaptación al nuevo período democrático*

Problemas tanto de definición política como de situación económica hicieron que un buen número de cabeceras históricas acabaran cayendo o se tambalearan durante los años de la Transición. Las dudas, vacilaciones u oscilaciones en su orientación editorial, dada la rapidez del proceso democrático, más la creciente competencia de periódicos nuevos sin hipotecas políticas del pasado y con menores costes de producción, motivaron estos episodios. Como expuso *El País* en un prospecto de lanzamiento, "el nuestro es un periódico sin pasado, que no tiene que arrepentirse de nada porque de nada se siente responsable" [\[50\]](#). O dicho con expresivas palabras de un escritor de la casa, Manuel Vicent, nacía "sin pecado original" [\[51\]](#).

Ya antes han sido brevemente descritas las turbulencias internas en *ABC*. También en el diario *Ya*, que había llegado a su máxima difusión y prestigio en 1975, se produjeron dudas y divergencias sobre qué línea seguir. La crisis final de UCD y su aplastante derrota en los comicios de 1982 arrastraron de algún modo al periódico, que no tuvo rubor en confesar que la base de dicho partido "era en gran parte la misma base a la que nosotros nos dirigimos, y sus principios, los nuestros" [\[52\]](#). Entrado ya en números rojos desde finales de los setenta, su tendencia descendente no se detendría.

Los datos de difusión de la prensa madrileña, expuestos en el cuadro I, hablan por sí solos. Entre 1975 y 1982 *ABC* y *Ya* descendieron en aproximadamente unos 60.000 ejemplares cada uno, mientras que en el mismo período de tiempo *El País* alcanzaba el liderazgo con casi 300.000 ejemplares de venta media diaria, y *Diario 16* se había situado en un estimable nivel de 125.000 ejemplares tras superar la crisis de los primeros años. Otro histórico como *Informaciones* se vio obligado a cerrar en 1980 tras descender su difusión en más de 30.000 ejemplares.

Casos aparte en cierto modo, debido a sus peculiaridades, fueron los de *Pueblo* y *El Alcázar*. El primero de ellos, que había vivido con Emilio Romero como director sus años de gloria entre 1956 y 1975, no pudo quitarse su imagen de diario ligado a la dictadura franquista y a sus sindicatos verticales y, en manos del Estado, bajó en picado desde los cerca de 200.000 ejemplares que llegó a vender durante el tardofranquismo a los apenas 45.000 de 1982. Su suerte estaba echada, y en 1984 terminaría desapareciendo. Por su parte, *El Alcázar* pasó de estar sumido en la miseria a experimentar un auge que pocos presagiaban. Tuvo el mérito de saber aglutinar a los nostálgicos del franquismo opuestos a la reformas democráticas. Como diario de oposición no sólo al gobierno sino al sistema, y a pesar de ir contracorriente, ganó lectores hasta llegar casi a los 100.000 ejemplares de difusión diaria cuando partía de la paupérrima cifra de 13.000 en 1975. *El Imparcial*, periódico nacido en 1977, y si bien con otro estilo y talante, también se alineó con *El Alcázar* en su

crítica continuada al naciente sistema democrático, pero apenas puso subsistir tres años.

Cuadro I. DIFUSIÓN DE LA PRENSA DIARIA MADRILEÑA

DE INFORMACIÓN GENERAL (1975-1982)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
<i>ABC*</i>	187.484	171.382	145.162	126.952	123.438	133.209	136.666	126.933
<i>Pueblo</i>	182.220	142.607	90.590	72.346	67.603	66.809	60.418	44.899
<i>Ya</i>	168.756	154.446	129.448	120.595	121.803	112.518	110.369	109.488
<i>Informacs.</i>	72.145	64.106	44.172	36.305	40.943	—	—	—
<i>El Alcázar</i>	13.119	26.724	63.646	66.104	58.126	70.679	83.224	95.027
<i>El País</i>	—	116.600	137.562	127.931	165.078	201.733	258.714	297.204
<i>Diario 16</i>	—	—	73.073	47.672	48.615	60.344	108.361	125.315
<i>El Imparcial</i>	—	—	—	51.962	55.980	31.408	—	—
TOTAL	623.724	675.865	683.653	649.867	681.586	676.700	757.752	798.866

Fuente: OJD. El diario *Arriba* no estaba sometido a control.

(*) Las cifras de *ABC* no incluían en aquellos años la edición de Sevilla, que contaba con un control separado.

Una evolución bastante similar, en cuanto a sus parámetros esenciales, ocurrió en el segundo gran mercado de prensa, el barcelonés. El cuadro II nos muestra cómo entre los tres grandes clásicos, esto es, *La Vanguardia*, *El Noticiero Universal* y *El Correo Catalán*, perdieron 100.000 ejemplares de difusión, que más o menos vinieron a coincidir con el nivel de ventas (112.000 en 1982) que consiguió *El Periódico de Catalunya*, la novedad más destacable y exitosa del panorama periodístico barcelonés. Ciertamente es que la crisis de ventas en que se sumió *La Vanguardia* no fue de tanta entidad como la de sus colegas madrileños *ABC* y *Ya*, pero se vio obligada, en el ámbito empresarial, a realizar un plan de saneamiento y reconversión tecnológica para superar la difícil situación. Un plan que se trazó a principios de 1980, con una duración prevista de diez años, y que afectó sobre todo al personal de talleres [\[53\]](#).

Más duro resultó el proceso para *El Noticiero* y *El Correo* que, tras diversos cambios empresariales e incluso de diseño y fórmula periodística, hubieron de cerrar en 1985, perdido ya el viejo prestigio de que gozaran. Otros de menor entidad histórica como los nacidos en los años sesenta *Tele/eXprés* y *Mundo Diario*, pese a que este último consiguió despuntar algo entre 1977 y 1978, cayeron en 1980 junto con todo el grupo Auger, en tanto el *Diario de Barcelona*, abandonado por Santacreu en 1980, bastante tenía con subsistir como podía. Finalmente, el órgano nacionalista *Avui* se estabilizó en unas cifras insuficientes dados sus propósitos y sus perspectivas, pero contó desde 1980 con la

inestimable ayuda económica de la Generalitat para sostenerse.

Cuadro II. DIFUSIÓN DE LA PRENSA DIARIA BARCELONESA

DE INFORMACIÓN GENERAL (1975-1982)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
<i>Vanguardia</i>	222.685	211.736	196.886	187.240	187.506	188.712	199.896	196.029
<i>Noticiero U.</i>	78.866	67.197	51.622	44.055	43.548	43.375	47.044	38.092
<i>Correo Cat.</i>	67.001	60.720	48.796	40.075	37.169	36.911	35.270	32.835
<i>Tele/eXprés</i>	35.631	33.584	22.663	—	—	—	—	—
<i>D. de Barc.</i>	28.743	30.311	25.842	—	—	—	—	—
<i>Avui</i>		55.727	40.036	33.496	32.613	36.373	38.471	38.068
<i>Mdo. Diario</i>		34.003	47.528	49.187	40.313	29.185	—	—
<i>El Periódico</i>	—	—	—	—	55.051	78.404	103.600	112.521
TOTAL	432.926	493.278	433.373	353.053	396.200	412.960	424.281	417.545

Fuente: OJD. Los diarios *La Prensa*, *Solidaridad Nacional* y *Catalunya Exprés* no estaban sometidos a control.

Fuera de los casos de Madrid y Barcelona, y a modo de ejemplo, encontramos un caso similar en Bilbao, aunque protagonizado sólo, como corresponde a un mercado de menor población, por dos periódicos. *La Gaceta del Norte* y *El Correo Español-El Pueblo Vasco* venían disputándose el liderazgo desde muchos años atrás. Más católico y tradicional el primero, de carácter algo más abierto y monárquico el segundo, partían ambos de un nivel de ventas igual prácticamente: 86.479 ejemplares para *El Correo* por 85.557 de *La Gaceta*. Los cambios políticos y la crisis económica dieron, sin embargo, la vuelta a la tortilla: mientras *El Correo* supo reaccionar periodística y empresarialmente y situarse debidamente en un territorio tan conflictivo como el País Vasco, *La Gaceta* quedó anclada en su pasado y condenada a su desaparición, que se hizo efectiva en 1983. Un año antes los datos eran elocuentes: sólo vendía 31.682 ejemplares diarios frente a los 83.393 de su colega. Tras sufrir aún un cambio de propiedad más, cerrar y reaparecer, desaparecería finalmente en 1987 [\[54\]](#).

Problemas específicos de adaptación al nuevo período democrático se vivieron singularmente en los MCSE, hasta julio de 1977 todavía cadena de Prensa del Movimiento. Buena parte de los directores, como cargos de confianza gubernamental que eran, procedían de las filas de la organización del Movimiento, a quien habían servido durante bastante tiempo. Al pasar a depender de los gobiernos de UCD, las relaciones se tornaron en ocasiones borrascosas. Incluso algunos directores hicieron la contra a la reforma política, al tiempo que con afán servilista se mostraban complacientes en otras directrices para continuar en su posición laboral privilegiada.

La posibilidad, que se convirtió en realidad, de que los redactores de los MCSE pudieran entrar como funcionarios de la Administración después de ser cerrados o vendidos a nuevos empresarios los periódicos en los que trabajaban, movió a algunos sectores a protestar por lo que consideraban un agravio comparativo. "¿Qué circunstancias excepcionales concurren en los actuales trabajadores de los MCSE para gratificarles con la condición de funcionarios?", se preguntaba *Diario 16* en 1978. Y añadía que por qué no se podían extender dichas circunstancias a los profesionales y trabajadores de medios como *Cuadernos para el Diálogo* y *Madrid* que, al contrario que los MCSE, lucharon por la libertad [\[55\]](#).

En todo este contexto político, periodístico y económico, acabaron triunfando y prevaleciendo, por lo general, las nuevas concepciones empresariales y de prensa impuestas por las nuevas iniciativas. Fueron las que marcaron la pauta, protagonizaron la transición y arrastraron a los demás periódicos a la necesidad de renovarse o morir. *El País*, sobre todo, y *Diario 16* en Madrid, más *El Periódico de Catalunya* en Barcelona fueron los tres grandes modelos que, por el volumen de su tirada y su capacidad de influencia, se fueron tomando como paradigmas. No en vano cada uno de ellos constituyó el germen de lo que, pocos años después, pasarían a ser potentes grupos de comunicación como Prisa, Zeta y el Grupo 16, que estarían presentes incluso en medios distintos de la prensa escrita.

El País se convirtió, en muy poco tiempo, en ineludible periódico de referencia tanto desde el punto de vista de la vida política y de la formación de la opinión pública como en los más específicos ámbitos empresarial y periodístico. El tándem Polanco-Cebrián funcionó casi a la perfección para mantener la unión y la sintonía "política" de la empresa y el periódico, y lo mismo cabe decir del tándem Cebrián-Baviano (gerente de Prisa) para la actuación coherente entre el producto periodístico e ideológico que era *El País* y su comercialización. Realizaciones como el Libro de Estilo en 1977, el ya mencionado Estatuto de la Redacción en 1980, el Anuario *El País* en 1982 y el corresponsal de los lectores u *ombudsman* en 1985 han sido imitadas posteriormente por otros medios; en otras palabras, crearon escuela.

Los otros dos modelos triunfantes pertenecieron, en contraposición a la seriedad formal de *El País*, a un tipo de periodismo más popular aunque no populachero. Después de sus iniciales vaivenes, *Diario 16* logró asentarse en el mercado ya a comienzos de los años ochenta y, en su afán por destacar, introdujo el color en sus portadas (algo ahora habitual en un buen número de diarios españoles) y rompió la tradición de no publicar ejemplares los lunes: una medida que si bien provocó polémica acabó imponiéndose. Por su parte, *El Periódico de Catalunya* constituyó, con su éxito comercial y periodístico, el paradigma de empresa editora joven, sin especiales conexiones — al igual que *El País* y *Diario 16*— con el régimen anterior y adecuada tanto periodística como ideológicamente a los nuevos tiempos. Su fórmula de diario ágil, urbano y popular caló en el segmento de población al que iba especialmente dirigido y llevó indirectamente a la quiebra a todos sus competidores por el segundo puesto del mercado barcelonés de prensa.

En los restantes mercados locales, provinciales o regionales el impulso no llegaría, por regla general, hasta mediados de los ochenta, cuando la situación económica permitió mayores inversiones para su actualización y mejora.

9. Algunas aventuras empresariales disparatadas

Los fracasos en empresas de tipo periodístico son muchas veces fruto de la precipitación, de la falta de bases financieras sólidas e incluso de la existencia de otros intereses extraperiodísticos como la ambición personal y política de quienes participan en ella. Buena parte de estos elementos se

dieron en un caso prototípico: el llamado Grupo Mundo, por ser alrededor de la revista *Mundo* como se gestara allá por 1966. Sebastián Auger comenzó comprando dicho semanario y otra revista, *Meridiano*; poco después fundó la editorial Dopesa (que fue bastante conocida por la edición de libros de actualidad) y un foro público llamado Club de Opinión Mundo. Sus ansias de estar presente en la vida madrileña le llevó a ser, durante poco más de un año, consejero-delegado del crítico diario *Madrid* antes de su cierre por el Gobierno. En 1972 compró el *Diario Femenino* de Barcelona, al que convertiría dos años más tarde en *Mundo Diario*. A la muerte de Franco lanzaría todavía dos periódicos nuevos en la ciudad condal: el vespertino popular *Catalunya Express* y el deportivo *4-2-4*, que constituyeron sendos fracasos.

Muy avanzada, pues, la década de los setenta, el imperio de Auger no acababa de funcionar: el semanario *Mundo*, que había gozado de prestigio en la posguerra, no acababa de levantar cabeza; *4-2-4* y *Catalunya Express* tampoco conseguían abrirse hueco; sólo *Mundo Diario*, y en una línea bastante izquierdista, cotizaba al alza. Además, la extensión de la crisis económica generalizada no suponía la mejor coyuntura para demasiadas alegrías inversoras. Sin embargo, en una especie de huida desesperada hacia adelante, Auger se embarcó en una política de compra de cabeceras semimoribundas y al borde del naufragio: en agosto de 1978 fue *Tele/eXprés*, propiedad entonces del conde de Godó, y pocos meses después el histórico vespertino madrileño *Informaciones* y el *Diario Regional* de Valladolid, a los que acabó por hundir del todo. Eran meses en los que la conflictividad laboral en los periódicos de su grupo había llegado incluso a la huelga, y se habían producido las primeras dificultades serias en el pago de las nóminas. A lo largo de 1979 y 1980 la situación fue empeorando hasta la quiebra total del grupo y el cierre de todas sus empresas y publicaciones. Desde el punto de vista jurídico estos episodios acabaron con el auto de procesamiento del empresario y su orden de búsqueda y captura, dado que huyó al extranjero.

A lo largo de unos quince años, Auger había ido jugando, ciertamente, muy distintas cartas a través de su acción en la vida pública como editor de publicaciones pero también como político en el Ayuntamiento de Barcelona y en otras instancias. Pareció que sus deseos de influencia pública estuvieran por encima de sus periódicos, faltos de una línea coherente, lo que unido a una gestión empresarial pésima, le llevaron a la ruina. Su caso es uno más de los que, por desgracia, se repiten en la historia del periodismo: empresarios advenedizos al mundo de la prensa que intentan servirse de ella como instrumento de promoción personal [\[56\]](#).

Paradigma de otro tipo de empresas periodísticas con planteamientos utópicos y excesivamente "románticos" fueron publicaciones como el *Diario Libre* en 1978 y *Liberación* entre 1984 y 1985, pasada ya la transición política propiamente dicha. Peculiares y pintorescas en sus planteamientos tanto periodísticos como empresariales, no llegaron a durar ni medio año. Con un lenguaje desenfadado y coloquial, poco convencional según los cánones de la prensa diaria escrita, el *Diario Libre* apenas llegaba a vender 4.000 ejemplares. El Grupo 16 que lo editaba no tuvo más remedio que cerrarlo. Por su parte, *Liberación*, de inspiración marxista y aire anarquizante y radical, intentaba revivir el espíritu del 68... pero en 1984. Su curiosa organización empresarial de tipo cooperativista y popular y la falta de afluencia de publicidad acabaron por sentenciarla. La economía de mercado, de modo inexorable, impuso sus reglas [\[57\]](#).

10. Las dificultades a la iniciativa privada en radio y televisión

Dado el distinto punto de partida en cuanto a libertad de expresión y de empresa, la radio y la televisión siguieron un camino diferente al de la prensa escrita aunque coincidente en su democratización. Ninguno de estos dos medios había sido afectado por la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, lo que significaba una situación de partida de mucho mayor control por parte de los

gobiernos. El Estado era el único propietario de las ondas hertzianas, el único explotador de la televisión y el mayoritario explotador de la radio donde, si bien existían cadenas no públicas en régimen de concesión administrativa, les estaba vedada a éstas la información política.

Costó más al Estado abrir la mano en estos dos medios. Así como en la prensa escrita el decreto del primero de abril de 1977 allanó el camino hacia el reconocimiento pleno de la libertad de información, en la radio éste no llegó hasta el mes de octubre, es decir, después de celebradas las primeras elecciones generales de la democracia, mediante un decreto en el que se abolía la obligación de conectar con Radio Nacional de España para emitir los "diarios hablados" de información política. La SER, principal cadena privada de radio, procedió en seguida a emitir sus propios servicios informativos. Y en la televisión, que siguió totalmente dependiente de los gobiernos de UCD, sólo el Estatuto de la Radio y de la Televisión de enero de 1980 significó un punto de esperanza democratizadora desde el punto de vista de la normativa legal. Otra cosa era que, por vía de hecho, a través de la dirección del Ente público o de la actuación de algunos profesionales de RTVE, también la televisión había ido acomodándose al nuevo tiempo político y a los nuevos aires de la sociedad española.

Estas carencias en el terreno de la libertad de información, junto con los controles de propiedad y explotación otorgados al Estado y la escasa competencia fueron dificultades patentes en el desarrollo y evolución de la radio y de la televisión durante los años de la transición. El mencionado Estatuto de 1980, consensuado entre el Gobierno de UCD y el PSOE, ratificaba la condición del Estado como propietario y titular de las ondas al definir la radio y la televisión como "servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado" [\[58\]](#), de lo que se colegía que los particulares que quisieran explotar dichos medios lo serían únicamente a modo de concesionarios y por un tiempo determinado. Otra muestra de la escasa predisposición del Estado a la libertad de empresa en el ámbito radiofónico fue la no abolición de la medida tomada por el último gobierno de Franco en 1975 consistente en la cesión gratuita al Estado, por parte de todas las emisoras privadas, del 25% de su capital social. Sólo a finales de los ochenta los gobiernos del PSOE empezarían a desprenderse de este lastre dictatorial.

La apertura radiofónica se encontró también, como ha sido dicho, con el hecho de la falta de competencia y, por ende, de pluralidad. Sólo la cadena SER, ampliamente implantada, tenía la capacidad suficiente para enfrentarse de tú a tú con RNE, como ya venía sucediendo durante el régimen franquista en todos los ámbitos que no fuesen el informativo. E incluso en este último se le toleró una cierta presencia a través de fórmulas radiofónicas un tanto ambiguas como los programas "Matinal" y, sobre todo, "Hora XXV" desde 1972. La COPE, arrastrando su origen de emisoras diocesanas, no estaba aún debidamente organizada como cadena nacional y la llamada Rueda de Emisoras Rato no tenía el volumen suficiente para ello. Habría que esperar a mediados de los ochenta para que la competencia radiofónica mostrara una mayor pluralidad.

A pesar de todos estos factores, que impidieron una mayor velocidad y dinamismo en los medios audiovisuales, hubo otros hechos que, por el contrario, propiciaron su desarrollo. Tales fueron, por ejemplo, la existencia progresiva de mayores márgenes para la libertad de información, el crecimiento espectacular de la audiencia radiofónica durante aquellos años (que pasó de 7 a 17 millones entre 1975 y 1982), el protagonismo que adquirió la radio en la noche de la intentona golpista del 23-F en 1981, la convocatoria del concurso de licencias para la explotación de emisoras FM en 1981, las discusiones públicas acerca de las posibilidades de introducir la televisión privada, la sentencia del Tribunal Constitucional en marzo de 1982 acerca de la solicitud de Antena 3 para obtener un canal privado de televisión, el interés declarado de las empresas

periodísticas por estar presentes en dichos canales, etc.

Estos acontecimientos hicieron que se animara tanto el interés público como el particular en estos negocios. La radio, en muy poco tiempo, había dejado de ser el "patito feo" de los medios y se había convertido en el medio informativo por excelencia, abandonando o relegando su anterior carácter como medio de entretenimiento y espectáculo. Se entiende así que, a la altura de 1981, las principales empresas periodísticas solicitaran emisoras de FM en el concurso abierto: nacieron algunas minicadenas como Radio El País y Radio 16, fracasadas al poco tiempo, o Antena 3, empresa en la que participaban *La Vanguardia* y *ABC* y que se constituyó en el mayor fenómeno periodístico de aquella década. La configuración de la radio española de la democracia tuvo en este concurso un primer impulso decisivo y determinante. Aun con los límites ya reseñados, la explotación particular de la radio se asentaría y consolidaría con los años.

Más compleja resultó la explotación de la televisión por la iniciativa privada. Muy poco después de la muerte de Franco, algunas empresas periodísticas hicieron pública su intención de participar en la futura televisión privada. Fue el temprano caso de las empresas editoras de *ABC* e *Informaciones*, entonces con vínculos accionariales entre sí, en noviembre de 1976 [59]. Y organizaciones como la AEDE y la AEA (Asociación Española de Anunciantes) también se mostraron abiertamente en favor de ella al ver las posibilidades comerciales y de negocio que presumiblemente se abrirían. En todo caso estos pronunciamientos tenían más de presión a los gobiernos de UCD que de genuina realidad.

Sí que constituyó, sin embargo, un proyecto serio y decidido el llevado a cabo por la sociedad "Antena 3, S.A.", a partir del inicio de sus actividades en 1979. Mediante una intensa campaña propagandística y empresarial creó la conciencia clara de que el artículo 20 de la Constitución de 1978 debía significar *ipso facto* la posibilidad de la explotación privada del medio televisivo, todavía monopolio estatal. Ciertamente una lectura directa de dicho artículo, inserto dentro del capítulo dedicado a las derechos y libertades fundamentales de los españoles, llevaba a dicha conclusión. ¿Qué quería significar si no el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión"? Pero el Gobierno se negó a acceder a la solicitud de concesión de un canal privado realizada por Antena 3 y la cuestión llegó al Tribunal Constitucional. Éste, en sentencia del 31 de marzo de 1982, determinó finalmente que la implantación de la televisión privada no era "una exigencia jurídico constitucional, sino una decisión política que puede adoptarse (...) por vía de una Ley Orgánica" [60]. En otras palabras, se reconocía el derecho contenido en la Constitución pero había que esperar a una decisión política del gobierno para su regulación efectiva.

Entretanto, bastantes voces dentro de UCD postulaban por el reconocimiento explícito de la televisión privada y llegaron a manejarse algunos proyectos, pero la división interna creciente en el seno de dicho partido no permitió sacarlos adelante. Es más, el sector socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez los boicoteó y llegó a hacer de ello *casus belli*, amenazando el entonces ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, con la dimisión a su presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En aquellos años, el PSOE se mostraba contrario a la introducción de la televisión privada, y a la altura de 1981 Ordóñez se fue distanciando cada vez más del Gobierno y sintonizando mejor con la oposición socialista. Otra muestra de la incapacidad de la UCD y de la presión creciente que ejercía el PSOE fue el hecho de que el Estatuto de la Radio y la Televisión de enero de 1980, consensuado entre ambas formaciones, hizo caso omiso de la televisión privada: no la contemplaba siquiera; dicho de otra forma, aunque no le cerraba el paso tampoco la reconocía, fijándose únicamente en la explotación pública del medio [61].

En resumidas cuentas, durante los años de la transición se produjo un reconocimiento jurídico-constitucional teórico de la televisión privada pero no práctico, dado que se dejaba su regulación en manos de un poder político que se demostró incapaz de conseguirla o contrario a ella. Hubo así que esperar a que la presión de los empresarios de prensa y de la opinión pública creciera con los años y a que los gobiernos de González controlaran los resortes principales del poder para que se diera luz verde por fin a la iniciativa privada en la televisión. Los anteriores argumentos socialistas en contra se demostraron así endebles y acomodaticios a una nueva situación de poder en la que las concesiones a los empresarios privados de prensa convenían a sus intereses políticos. Pero esta cuestión trasciende los límites cronológicos que nos interesan.

11. *Algunas conclusiones*

Hemos pretendido describir someramente el marco necesario para la comprensión de las relaciones entre empresarios, periodistas y poder político en un tiempo de grandes transformaciones como fue la transición a la democracia; transformaciones que se operaron en cada uno de esos tres estamentos de acuerdo con sus características y dinamismo propios. Aun siendo muchos los aspectos tratados, podemos destacar a modo de síntesis final no exhaustiva, las siguientes conclusiones globales:

1) Con la llegada de la democracia podía esperarse un mayor número y una mayor pluralidad de medios diarios de prensa debido al reconocimiento primero político y luego constitucional de la libertad de información. Sin embargo, las duras condiciones de un mercado periodístico sometido a una crisis económica general, la pervivencia de estructuras empresariales anticuadas y perjudiciales para el dinamismo interno, y la competencia de medios ya más liberalizados y competitivos como la radio y la televisión hicieron que se produjera un cierto estancamiento o sólo un leve crecimiento de difusión.

2) Se produjo así una depuración o selección natural donde sólo pudieron sobrevivir los más fuertes, los que supieron adaptarse o readaptarse a los nuevos tiempos políticos, periodísticos y empresariales, que claramente impusieron sus pautas.

3) Dicha adaptación supuso la "conversión democrática" de los principales empresarios de prensa, cuya convivencia más o menos obligada y/o afinidad con el régimen franquista había sido básicamente pacífica. Y también supuso la "conversión democrática" de la mayoría de la clase periodística. El pragmatismo fue, en este sentido, la nota dominante en ambos sectores, lo cual no excluyó la existencia de elementos minoritarios que se mostraron contrarios al cambio democrático y la presencia de nuevos problemas derivados de las implicaciones políticas de los empresarios de prensa en unos tiempos políticos convulsos y cambiantes.

4) El cambio de prácticamente la mitad del panorama de la prensa diaria llevó a una nueva alineación de fuerzas empresariales e ideológicas en España, bastante distinta a la existente diez años antes en 1975, y más representativa de los nuevos tiempos que se vivían. Una alineación que sería preparación de la nueva etapa que comenzaría a mediados de los ochenta, con España dentro de la Comunidad Europea, con mayor estabilidad política y económica que en los años precedentes, con el nacimiento de los grupos multimediáticos de comunicación, etc.

5) La iniciativa privada en radio y televisión, hasta los años ochenta separada de la habida en prensa, va a empezar a ser plato apetecido por los empresarios de prensa: Prisa (SER), Godó, Prensa Española y Zeta (Antena 3), Grupo 16 (Radio 16)...; lo cual se ratificará en el futuro, y producirá, dado el carácter concesional de su explotación comercial, una mayor relación de

dependencia respecto del poder político por parte de los principales grupos o empresas de comunicación aspirantes.

[1] Cfr. IGLESIAS, Francisco, "Las transformaciones de la prensa diaria", en Jesús Timoteo Álvarez y otros, *Historia de los medios de comunicación en España: periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Ariel, Barcelona, 1989, pp. 436-444.

[2] Alfonso Nieto, pionero en España de los estudios sobre la empresa periodística, quiso ya en 1967 "significar la especial naturaleza de la Empresa periodística en cuanto que su objeto, su finalidad última, trasciende los aspectos puramente industriales o de producción en masa. La necesidad que satisface la comunicación de ideas o informaciones es fundamentalmente intelectual, espiritual, inmaterial. Ello no excluye que ese contenido editorial tenga repercusiones económicas (...) Pero la consideración económica del producto (...) no constituye la esencia de la Empresa periodística" (*El concepto de empresa periodística*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1967, p. 31).

[3] En este contexto es como deben entenderse, por ejemplo, afirmaciones como la del presidente de los editores de prensa, a propósito del lugar preeminente de la publicidad en la empresa periodística: "El ejercicio del 'cuarto poder', que es tenido como pilar fundamental de la democracia, viene a depender de estrategias comerciales que nada tienen que ver con las funciones políticas, sociales y culturales que la empresa periodística tiene por objeto" (CRESPO DE LARA, Pedro, *La empresa periodística en vivo. Del autoritarismo a la democracia*, Ariel, Barcelona, 1995, p. 41).

[4] CEBRIÁN, Juan Luis, *La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición*, Taurus, Madrid, 1980, p. 107.

[5] *Ibíd.*

[6] ALFÉREZ, Antonio, *El cuarto poder en España. La prensa desde la Ley Fraga*, Plaza & Janés, Barcelona, 1986, p. 11.

[7] Cfr. los datos recogidos por Javier Terrón Montero en *La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de análisis político*, CIS, Madrid, 1981, pp. 206-218.

[8] Pedro Crespo de Lara en dos de sus libros, efectúa un análisis y repaso de la jurisprudencia del alto Tribunal respecto de estos casos. En el segundo de ellos (*La prensa en el banquillo, 1966-1977*, AEDE, Madrid, 1988), recoge hasta 104 sentencias correspondientes a sanciones cometidas hasta 1975, de las que 20 estimaban total o parcialmente los recursos interpuestos por los periódicos. (Cfr. también, del mismo autor, *El artículo dos. La prensa ante el Tribunal Supremo*, Prensa Española, Madrid, 1975)

[9] Un resumen de estos medios puede encontrarse en: BARRERA, Carlos, *Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura*, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1995, pp. 98-103.

[10] Cfr. ROGADO, Basilio, *La prensa del silencio*, Mirasierra, Madrid, 1975, pp. 208-209 y 255-257.

[11] Vicente Ibarra, consejero delegado del diario *Informaciones*, escribió en 1959 un informe en el que se quejaba de ese trato de favor, detallando diversos aspectos cuantificables y otros ejemplos. Y mencionaba, ya al final, "el caso de que algún periódico de empresa privada, para conseguir el permiso de importación de alguna máquina nueva, ha tenido que ser a costa del desprendimiento por parte de uno de sus socios, de divisas de su propiedad particular, pues de otra manera nunca se hubiera conseguido, a pesar de tenerlo solicitado desde hace más tiempo que los diarios enumerados" (*Informe de Don Vicente Ibarra, consejero delegado de "Informaciones", sobre el trato de favor que dan a la Prensa del Movimiento con relación a las empresas privadas*).

[12] Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta (BOE, nº 67, de 19 de marzo), preámbulo.

[13] Art. 29 de la Ley.

[14] El artículo 31 especificaba que "cuando una empresa periodística ya inscrita desee iniciar una nueva publicación periódica deberá también hacerla objeto de inscripción, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores".

[15] Cfr. LORENZO, Pedro de, *Diario de la mañana*, Universitas Editorial, Badajoz, 1983, pp. 235-236.

[16] Cfr. BARRERA, Carlos, *op. cit.*, pp. 127-131 y 136-139.

[17] Una autoridad española, no citada por su nombre, señaló a finales de los años sesenta que la guerra civil "la habían ganado los periódicos pequeños". Cfr. ALBARELLOS, Ignacio, *La guerra en los campos españoles*, Talleres Gráficos Diario de Burgos, Burgos, 1970, p. 3.

[18] Franco, en declaraciones a *Arriba*, 1.IV.1969.

[19] Había, sin embargo, dentro de la sociedad editora algunos accionistas falangistas que, aunque en situación minoritaria, maniobraron para hacerse con el control. Cfr. BARRERA, Carlos, *El diario Madrid: realidad y símbolo de una época*, Eunsa, Pamplona, 1995.

[20] Más datos sobre estos periódicos y sus cambios de propiedad en: GUILLAMET, Jaume, *Prensa, franquisme i autonomia. Crònica catalana de mig segle Llarg (1939-1995)*, Barcelona, 1996.

[21] SANTOS, Félix, *Periodistas. Polanquistas, sindicato del crimen, tertulianos y demás tribus*, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pp. 57-58.

[22] Muy expresivamente, un malogrado escritor navarro, José María Sanjuán, bautizó a esta generación, a la que él mismo pertenecía, como "la generación de la nueva conciencia". Cfr. BARRERA, Carlos, "José María Sanjuán, el diario Madrid y la nueva conciencia", en *Estudios en honor de Luka Brajnovic*, Eunsa, Pamplona, 1992, pp. 225-233.

[23] ROGLAN, Joaquim, *El Grup Democràtic de Periodistes (1966-1976). Crònica d'un periodisme esperançat*, Col.legi de Periodistes, Barcelona, 1994, pp. 32-33.

[24] Cfr. AGUILAR, Miguel Angel, *El vértigo de la prensa*, Mezquita, Madrid, 1982, pp. 89-110. En dicho libro ha dejado escrito que "nuestro trabajo consistía en cartas de protesta, mociones a las Asambleas generales, apoyo a los represaliados, acciones de solidaridad, manifestaciones sincronizadas con otras actividades de la oposición" (p. 93).

[25] Sin embargo, cuando la Sociedad de Redactores intentó personarse como parte interesada en la resolución del expediente abierto contra la empresa editora del diario *Madrid*, y que provocaría su cierre el 25 de noviembre de 1971, la Dirección General de Prensa se lo denegó dado que no era posible el reconocimiento de su personalidad jurídica por su carácter extrasindical.

[26] AGUILAR, Miguel Angel, *op. cit.*, pp. 192-193. El subrayado en cursiva es nuestro.

[27] Cfr. IMBERT, Gerard/VIDAL BENEYTO, José, *El País o la referencia dominante*, Mitre, Barcelona, 1986; CRUZ RUIZ, Juan, *Una memoria de "El País". 20 años de vida en una redacción*, Plaza & Janés, Barcelona, 1996.

[28] Cfr. VARIOS AUTORES, *Periodisme en temps difícils. L'escola del CIC (1964-1904)*, Diputació de Barcelona/Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 1989.

[29] Ya desde 1958, con la creación del Instituto de Periodismo en el entonces Estudio General de Navarra, Universidad desde 1962, hubo un centro de formación de periodistas cuyos estudios tenían rango universitario frente a la dependencia política de la Escuela Oficial de Periodismo.

[30] CRESPO DE LARA, Pedro, *op. cit.*, p. 58. En el prólogo a este libro, Jesús de Polanco califica a la AEDE como "pieza necesaria en la democracia española, que ha facilitado enormemente la acomodación de la empresa periodística a la economía de mercado" (p. 16)

[31] Fue el caso de los MCSE, cuyos puestos de responsabilidad fueron ocupados muchas veces por las mismas personas que estaban presentes cuando eran Prensa del Movimiento. Ejemplos de algunos de estos comportamientos en: SÁNCHEZ RADA, Juan, *Prensa: del Movimiento al socialismo*, Fragua, Madrid, 1996.

[32] Omitimos aquí, por dejarlas para más adelante, la situación de la libertad de expresión en los otros dos grandes medios: la radio y la televisión. Por sus características específicas, merecen un estudio separado.

[33] Real Decreto-Ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión (*BOE*, núm. 87, de 12 de abril de 1977).

[34] "Prensa y libertad", editorial de *El País*, 9.IV.1978, p. 6.

[35] Cfr. *AEDE*, nº 4 (enero 1981), pp. 45-56, donde se reseñan hasta 122 casos distintos.

[36] Cfr. datos de J. Walter Thomson en: TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús, *op. cit.*, p. 387.

[37] Cfr. IGLESIAS, Francisco, "La crisis de la prensa diaria en España", *Nuestro Tiempo*, nº 308 (febrero 1980), pp. 4-21.

[38] AGUILAR, Miguel Ángel, *op. cit.*, pp. 120-121.

[39] El primer gobierno socialista mantuvo las subvenciones a la prensa escrita si bien, merced a la Ley de 2 de agosto de 1984, estableció unos criterios más objetivos y menos sujetos a arbitrariedades. Después de algún tiempo y ya ingresada España en la Comunidad Europea, se decidió en 1989 retirar dichas ayudas. Cfr. Rosario de Mateo (coordinadora), *La empresa periodística en los ochenta*, Fundación Conde de Barcelona, Barcelona, 1988, pp. 25-30 y 49-53.

[40] No se trata tampoco, pues, de llevar hasta límites exagerados las dependencias empresariales o personales de un órgano de prensa, como por ejemplo hacen algunos autores en sus libros. Cfr., p. ej., BUSTAMANTE, Enrique, *Los amos de la información*, Akal, Madrid, 1982.

[41] En un artículo escrito poco después del cierre, su autor aludía a "las cartas del presidente del Consejo de Administración rectificando (sic) algunos puntos ideológicos traslucidos por la redacción del matutino" (REVILLO RUBIO, Magín, "Nuevo Diario. Pasión, muerte y ¿resurrección?", *Comunicación XXI*, nº 26, p. 19).

[42] ALFÉREZ, Antonio, *op. cit.*, p. 109.

[43] *Diario de Barcelona*, 18.I.1980, p. 1.; recogido en: Víctor Saura, Joan Carles Clarós, Xavier Vilà, *La crisi d'identitat del Brusi*, Diputació de Barcelona / Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 1993, pp. 85-86.

[44] Después de algunos años en que el Ayuntamiento arrendó la explotación a la Once y luego al grupo *Nou Diari*, el periódico dejó de editarse en 1993.

[45] Cfr. RAMÍREZ, Pedro J./ ROBLES, Marta, *El Mundo en mis manos*, Grijalbo, Barcelona, 1991, pp. 199-207.

[46] RAMÍREZ, Pedro J./ ROBLES, Marta, *Ibíd.*, pp. 201-202.

[47] Cfr. RAMÍREZ, Pedro J., *Así se ganaron las elecciones 1979*, Prensa Española, Madrid, 1979, pp. 66-67; AGUILAR, Miguel Angel, *op. cit.*, p. 18; SÁNCHEZ RADA, Juan, *op. cit.*, p. 96. Aguilar pone en boca de Juan Tomás de Salas, fundador y presidente de la empresa editora, las siguientes palabras a él dirigidas: "¡Qué van a decir nuestros amigos de UCD!; ¡has dejado imposibles nuestras relaciones con quienes nos han ayudado, comprando el 40 por 100 del accionariado!". En efecto, Aguilar cesó como director en el mismo año 1980 en que sitúa esas palabras. Cfr. también ALONSO-CASTRILLO, Silvia, *La apuesta del centro. Historia de la UCD*, Alianza, Madrid, 1996, pp. 416-418.

[48] Cfr. GUILLAMET, Jaume, *op. cit.*, pp. 98-99 y 164; MONTANER, Jordi, *El "Ciero" no va arribar al segle*, Diputació de Barcelona / Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 1989, pp. 27-35.

[49] Cfr. SÁNCHEZ RADA, Juan, *op. cit.*, pp. 56 y 103-156.

[50] *El País*, 31.III.1976 (prospecto), p. 1: "A la altura de los tiempos"

[51] CRUZ RUIZ, Juan, *op. cit.*, p. 31.

[52] *Ya*, 20.II.1983, p. 5: "Las ideas y las formas" (editorial). Más detalles sobre la vida interna y las posturas del periódico en: ALFÉREZ, Antonio, *op. cit.*, pp. 54-68; y BARRERA, Carlos, *Sin*

mordaza. Veinte años de prensa en democracia, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pp. 92-99.

[53] Cfr. FRANCÀS, Jaume, "Problemas derivados de la reconversión tecnológica: inversiones en maquinaria, ajuste de plantillas", en Rosario de Mateo (coordinadora), *op. cit.*, pp. 71-79. Señala, por ejemplo, cómo en *La Vanguardia* disminuyó el personal que trabajaba en composición de 232 a 148 operarios entre 1982 y 1986.

[54] Una descripción y análisis del periodismo en Vizcaya durante la transición puede encontrarse en: SÁNCHEZ-TABERNERO, Alfonso, *El Correo Español-El Pueblo Vasco y su entorno informativo (1910-1985)*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1989, pp. 401-462.

[55] *Diario 16*, 2.V.1978: "Prima a los franquistas y castigo a los demócratas". Editorial recogido por AGUILAR, Miguel Ángel, *op. cit.*, pp. 25-26.

[56] Miguel Ángel Aguilar ha puesto a Auger como ejemplo de "los nuevos empresarios [que] han dado casi siempre la imagen del pirata en busca de oportunidades de notoriedad". Y hablaba de que "no era un caso aislado, sino un buen paradigma que resume muchos otros comportamientos [de] empresarios que lo tuvieron todo en sus manos y lo derrocharon". En: AGUILAR, Miguel Ángel, *op. cit.*, p. 168.

[57] Cfr. BARRERA, Carlos, *Sin mordaza...*, pp. 112-114.

[58] Estatuto de la Radio y la Televisión: Ley 4/1980, de 10 de enero. (*BOE*, núm. 11, de 12.I.1980)

[59] Cfr. IGLESIAS, Francisco, *Historia de una empresa periodística. Prensa Española, S.A. Editora de ABC y Blanco y Negro (1891-1978)*, Prensa Española, Madrid, 1980, p. 425.

[60] El texto íntegro de la sentencia puede encontrarse en la revista *AEDE* nº 6 (primer semestre de 1982), pp. 43-50.

[61] De ahí que el Tribunal Constitucional, en la ya referida sentencia, se apoyara en este Estatuto para establecer que "la configuración de la televisión como servicio público, aunque no sea una afirmación necesaria en nuestro orden jurídico-político, se encuentra dentro de los poderes del legislador".